

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°102

Medellín, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **SIMÓN JAIBERT BOLIVAR TEJADA** contra **PROTECCIÓN S.A., SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.**

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El actor solicita que se deje sin efectos los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez de Antioquia y Nacional; y, en consecuencia, se declare que tiene una pérdida de capacidad superior al 50% estructurada desde el 30 de julio de 2015, por lo que **Protección S.A.** deberá continuar reconociendo la pensión de invalidez de la que venía disfrutando y que le fue suspendida a partir del 1 de noviembre de 2013, reconociendo el pago de los respectivos intereses moratorios o en subsidio la indexación de las condenas.

Hechos

El demandante indica que es afiliado a **Protección S.A.** y que debido a que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 51.45% estructurada desde el 31 de julio de 2005, esta administradora le reconoció pensión de invalidez.

A partir del **1 de noviembre de 2013**, la AFP de forma arbitraria suspendió el pago de la pensión, aduciendo que revisado el estado de invalidez se puede establecer que para esa fecha de conformidad con dictámenes expedidos por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez su pérdida de capacidad era del 21.55% estructurada desde el 28 de junio de 2013.

Inconforme con dichas calificaciones, el actor acudió a la **IPS Universitaria** entidad que estableció que su pérdida de capacidad era del 51,3% siendo superior a la establecida por las entidades demandadas y la fecha de estructuración era el 31 de julio de 2005.

Contestación Seguros de Vida Suramericana S.A.

Esta entidad a través de apoderado indicando que son ciertos los hechos, que la calificación realizada en el año 2013 obedeció a la potestad de revisión periódica con que cuentan los fondos de pensiones y que se opone a las conclusiones presentadas a través de dictamen emitido por perito particular.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación por pérdida de la condición de invalidez, falta de causa para pedir, improcedencia de la condena a intereses moratorios, prescripción y compensación.

Contestación Protección S.A.

Protección S.A. a través de apoderada que son ciertos los hechos, aclarando que la pensión fue suspendida teniendo en cuenta que el actor no tiene la condición de persona invalida. En lo referente a la calificación realizada de forma particular señala que no le consta como quiera que no fue convocada a dicho procedimiento y no tuvo la oportunidad de controvertirla.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: falta de cauda para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas y prescripción.

Contestación Junta Nacional de Calificación de Invalidez

Esta entidad por intermedio de apoderada contestó la demanda indicando que es cierto el contenido de su dictamen, sin que le consten los demás hechos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones:

legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, variación de la condición médica del paciente, improcedencia del petitum, improcedencia de la favorabilidad respecto de la calificación médica ocupacional, inexistencia de obligación a cargo de la Junta Nacional y buena fe.

Contestación Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia

Esta entidad dio respuesta a la demandada indicando que son ciertos los hechos referentes a la calificación de la pérdida de capacidad laboral por parte de esa entidad sin que le consten los demás hechos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: legalidad, eficacia y obligatoriedad del dictamen y prescripción.

Sentencia de Primera Instancia

El Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **31 de marzo de 2023, negó** las pretensiones del demandante por considerar que el actor no se encuentra en condición de invalidez atendiendo en este sentido el dictamen sustentado en audiencia pública.

Esta decisión no la compartió el apoderado del demandante, motivo por el cual la impugnó en los siguientes términos:

Recurso de apelación demandante

El recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, por cuanto el caso debe ser dirimido a través del modelo social de discapacidad consagrado en el artículo 1 inciso 2 de la Ley 1346 de 2009, superando el modelo médico rehabilitador, que es por el que propenden las juntas y los manuales de pérdida de capacidad laboral.

En ese orden debe tenerse en cuenta las barreras que se imponen por el Estado y la sociedad, orientación adoptada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-1171-2022, lo que lleva a determinar que el demandante no cuenta con una capacidad laboral, aspecto que incluso fue concluido por el perito decretado de oficio con base en el Decreto 1507 de 2014, que determinó que la pérdida de capacidad del actor era superior al 50%, norma que podía ser aplicada de conformidad con el artículo 5° del Decreto 1507 de 2014.

Destaca que en la sustentación de la IPS Universitaria se parte de una situación indiscutida en el proceso y es que el demandante sufrió un TEC que le produjo

un síndrome pre frontal que trajo un compromiso cognitivo y neurológico, lo que lo limita para desplegar una actividad laboralmente remunerada, aspecto que incluso aceptó el CES en el primer dictamen rendido en el proceso.

Pero hay otro aspecto fundamental y es que existe un criterio material de invalidez, por cuanto padece un diagnostico que no tiene cura y que las secuelas aparecen un año después del accidente y que los fármacos mantiene en un estado funcional al paciente, pero que persisten los trastornos mentales.

Destaca que al existir una lesión del lóbulo frontal del actor se debió calificar con la tabla 12.4.2. y no con base en otras tablas, por lo demás indica que el segundo dictamen presentado por el perito es poco creíble y presenta varios errores frente al primer dictamen que fue presentado, lo que le resta eficacia probatoria al mismo.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, el apoderado de **Seguros de Vida Suramericana S.A.** solicitó que se confirme la decisión de primera instancia debiéndose tener como prueba de la pérdida de capacidad del actor el dictamen rendido en audiencia que da cuenta que el demandante a la fecha recuperó parte de su capacidad y por lo tanto no puede ser considerado como persona en condición de invalidez.

En este mismo sentido presentó alegatos la apoderada de **Porvenir S.A.**

CONSIDERACIONES

Problema Jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con el recurso de apelación interpuesto, serán: (i) Establecer si el señor **Simón Jaibert Bolívar Tejada** acredita una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% a partir de la cual se pueda predicar que se encuentra en condición de invalidez, y (ii) en consecuencia le debe ser restablecido el reconocimiento de la pensión que le fue suspendida desde el 1 de noviembre de 2013 y el pago de los intereses moratorios respecto de las mesadas pensionales adeudadas.

Pruebas relevantes

Antes de resolver, considera la Sala importante hacer las siguientes precisiones de conformidad con la prueba obrante en el expediente:

1. El señor **Simón Jaibert Bolívar Tejada** fue calificado por el Centro para los Trabajadores con una pérdida de capacidad laboral del 51.45% estructurada desde el 31 de septiembre de 2005 (03/págs.141-144).
2. Mediante comunicación del **5 de enero de 2007**, **Protección S.A.** informó al demandante acerca del reconocimiento de la pensión de invalidez a partir del 31 de julio de 2005 (03/págs.21-23).
3. Mediante Dictamen 44537 del 28 de junio de 2013, la **Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia** determinó que el actor tiene una pérdida de capacidad laboral del 21,55% estructurada desde el 28 de junio de 2013 (03/págs.26-32).
4. Esta experticia fue confirmada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez a través del Dictamen 7131340 del 23 de octubre de 2023 (03/págs.35-42).
5. En comunicado del **18 de noviembre de 2013**, **Protección S.A.** informó al demandante la finalización del reconocimiento de la pensión de invalidez teniendo en cuenta que mediante dictamen de la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez** se determinó que su pérdida de capacidad laboral era del 21,55% (03/págs.24-25).
6. A través de dictamen realizado el 6 de diciembre de 2014 en la **IPS Universitaria** se indicó que el actor tiene una pérdida de capacidad laboral del 51,3% estructurada desde el 30 de julio de 2005 (03/págs.43-46).
7. En dictamen pericial decretado como prueba de oficio para la cual fue designado el CENDES, el cual fue presentado el 9 de abril de 2018, el perito Jaime Ignacio Mejía Peláez estableció una pérdida de capacidad laboral del 58,9% estructurada desde agosto de 2006, dictamen emitido bajo los lineamientos del Decreto 1507 de 2014 (03/págs.698-710).
8. Este dictamen fue objeto de corrección por parte del perito, anotando que *“en el año 2018...evaluó caso con información incompleta de historia clínica respecto de la que ahora se aporta, con lo cual se obtienen elementos de mayor consistencia y permite hacerle un seguimiento de evolución de su cuadro clínico neurológico y mental en el tiempo”* (11/pág.13).
9. En el nuevo dictamen expedido bajo el Decreto 917 de 1999, se estableció que el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral del

24,16% estructurada desde el 26 de noviembre de 2014, fecha en la que conforme con evaluación neuropsicológica realizada por la Dra. Ángela García Dificultades, se indicó que el actor tiene “*TAC de cráneo simple 2013: Normal. Grado 3 para deterioro global, déficit cognitivo leve. Conclusión: estado general por debajo de lo esperado. Lesión orgánica que se corrobora con RNM cerebral de 2 de mayo de 2016 (folios 532, 533) que reportó lesión malácica y gliosis prefrontal bilateral de predominio derecho*” (11/págs.3-18).

A partir de los anteriores hechos procederá la Sala a resolver el problema jurídico puesto en su conocimiento.

De la calificación del estado de invalidez

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, para los efectos del Sistema General de Pensiones, se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

En el caso estudiado el demandante pretende, que, luego de dejar sin efectos los dictámenes emitidos por la **JRCIA** y **JNCI**, se declare que tiene una pérdida de capacidad superior al **50%** estructurada desde el **30 de julio de 2005**; y en consecuencia, debe ser considerado como persona en condición de invalidez, para efectos pensionales.

Para resolver este aspecto, resulta de fundamental importancia recordar que de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2463 del 20 de noviembre de 2001, vigente para la fecha en que se calificó en primera oportunidad al señor **Simón Jaibert Bolívar Tejada**, la firmeza de los dictámenes emitidos por los órganos competentes no es definitiva y su valor probatorio puede ser atacado ante el juez laboral mediante el procedimiento ordinario, utilizando para el efecto diferentes medios probatorios que permitan demostrar que existe una pérdida de capacidad superior a la establecida, o que la fecha de estructuración puede ser anterior o posterior.

Lo importante en este horizonte es que se demuestre que incurrieron las entidades calificadoras en un error de carácter técnico, por cuanto aquellas que entrañan una controversia de orden jurídico están atribuidas al Juez del Trabajo. (Sentencias 11910 del 29 de septiembre de 1999, SL16374 de 2015 y SL-3992 de 2019)

La técnica, requisitos y procedimiento para la calificación de la invalidez se encontraba para la fecha de los hechos regulada por el Decreto 917 de 1999 - Manual único de Calificación de Invalidez-MUCI-, por lo que cualquier ataque

dirigido a desvirtuar la eficacia de los dictámenes, debe demostrar sus falencias técnicas evidenciando los errores en los que el experto o expertos incurrieron o aquellas patologías que se desconocieron al valorar las condiciones en que se encontraba la persona que fue calificada.

En este sentido es dable recordar que los dictámenes emitidos en desarrollo del trámite administrativo reglado en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, ingresan al proceso en calidad de pruebas, pudiéndose debatir su eficacia probatoria a través de otros medios de prueba, que pueden atacar aspectos como su solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad.

En este punto es fundamental recordar lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL-4297-2021, en la que al efecto se indicó:

Sobre los dictámenes emitidos por las autoridades competentes para establecer la pérdida de la capacidad laboral, esta Sala ha venido sosteniendo que si bien tienen una importancia manifiesta por su carácter técnico- científico, no es menos cierto que constituyen un medio de convicción más en el proceso y que, en esa medida, no son prueba solemne y su contenido no es inexorable e intangible y, por ende, se encuentran sometidos a la crítica integral de valoración por parte del juez.

En ese orden, y como quiera que el dictamen pericial aportado con la demanda, tiene el carácter de prueba en el proceso, lo procedente es determinar si el mismo como se indica en la demanda contiene un mayor detalle y tiene en cuenta de forma completa la historia clínica del actor incluyendo diagnósticos que están soportados objetivamente en la misma pero que fueron desconocidos por los dictámenes emitidos por la **JRCIA**, la **JNCI** y el **CENDES** en dictamen expedido el 20 de octubre de 2021.

De la prueba del estado de invalidez

El apoderado del demandante en su recurso indica que con el dictamen aportado al expediente que contiene el concepto del perito **José William Vargas Arenas** médico adscrito a la **IPS Universitaria** se indicó que el actor tiene una pérdida de capacidad laboral del 51,3% estructurada desde el 30 de julio de 2005 (03/págs.43-46), concepto constatado por el perito **Jaime Ignacio Mejía Peláez** en un primer dictamen proferido el 9 de abril de 2018, en el que tuvo en cuenta el Decreto 1507 de 2014 (03/págs.698-710).

Este primer dictamen dictado al interior del proceso constituye el referente fundamental de la sustentación del recurso que presenta el actor, indicando que

existiendo dos dictámenes presentados por un mismo profesional se debe en este caso dar mayor eficacia al primero, para lo cual señala que incluso la valoración con base en el Decreto 1507 de 2014 tiene en cuenta un nuevo enfoque del concepto de incapacidad, aspecto que desde la técnica fue bien explicado por el perito quien manifestó que las dos normas de calificación permiten asignar un porcentaje de pérdida de la capacidad derivada de las secuelas que presenta el demandante (por lo que no se presenta un criterio diferencial en el criterio de discapacidad en lo referente al porcentaje asignado en uno y otro), explicando que la diferencia entre los dos dictámenes que expidió se sustenta en que en la primera no contó con la totalidad de la historia clínica y solo se le allegó conceptos del año 2014, diferente al segundo momento donde contó con una historia completa.

Lo anterior, implica que el dictamen en el que edifica su recurso el apoderado del demandante carece de cualquier eficacia probatoria como quiera que su autor admitió que la misma no se soportó en la totalidad de la historia clínica y con ello se edificó sobre una versión parcial de los hechos- desestimando su anterior pericia-, para corregirla, indicando que en el momento en que contó con todos los elementos para resolver y previa la realización de examen médico del calificado advirtió que el paciente se encuentra en remisión de las posibles secuelas lo que da cuenta de que en la actualidad no se evidencian las mismas, situación que pudo comprobar en el trato con el paciente a quien describe como una persona totalmente normal y con la capacidad para desenvolverse en el ámbito laboral.

En este horizonte la única prueba en la que a juicio de la Sala se soporta la condición de invalidez del demandante es el dictamen emitido por el perito **José William Vargas Arenas** médico adscrito a la **IPS Universitaria**, experticia realizada el 6 de diciembre de 2014, la cual consultada en sus soportes solo da cuenta de forma general de la historia clínica y la evaluación neuro psicológica del 26 de noviembre de 2014 (03/pág.43), siendo esta valoración con base en la cual se concluyó que la situación de invalidez del paciente persiste, pues en ella se dijo *“estado general por debajo de lo esperado”*.

Con respecto de esta experticia, la Sala encuentra que pese a que indica que se emitió con base en la totalidad de la historia, no tiene una soporte científico de su dicho pues apenas presenta una conclusión con base en un elemento, desconociendo que la historia clínica contiene otras valoraciones y conceptos de los profesionales tratantes, pericia que por demás resulta incoherente en su sustentación pues mientras en desarrollo del informe se dijo que la deficiencia era del 30%, al momento de sustentarla dijo que era del 40% con base en la tabla 12.4.2., situación que hace que la misma carezca de eficacia probatoria.

En la medida de lo anterior y como quiera que no se demostró en el proceso desde los elementos propios de la técnica de la calificación que los dictámenes objeto del juicio hayan incurrido en un error, es claro para la Sala que los mismos resulta eficaces, y en esa medida se advierte que la pérdida de capacidad del actor no alcanza un porcentaje del 50% por lo que no tiene derecho al restablecimiento de la pensión de invalidez que le fue suspendida desde el pasado 1 de noviembre de 2013, confirmándose en este aspecto la decisión apelada.

Costas

Costas en esta instancia a cargo del demandante de conformidad con lo establecido en el numeral 3) del artículo 365 del CGP. El valor de las agencias en favor de cada una de las demandadas se fija en la suma de \$290.000.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada el día **31 de marzo de 2023** por el Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **SIMÓN JAIBERT BOLIVAR TEJADA** contra **PROTECCIÓN S.A., SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA** y **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del demandante. El valor de las agencias en favor de cada una de las demandadas se fija en la suma de **\$290.000**.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Simón Jaibert Bolívar Tejada
Demandado	Protección S.A., Seguros de Vida Suramericana S.A., Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez
Radicado	05001-31-05-014-2015-00222-01
Decisión	Confirma sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 29 de mayo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 29 de mayo de 2022 a las 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO